

Señores

JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D.

Referencia: Proceso de Espectáculos y Eventos de Colombia S.A.S. –
COLBOLETOS vs. América de Cali S.A. en Reorganización.

Radicado: 76001310301520180012000.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de **ESPECTÁCULOS Y EVENTOS DE COLOMBIA S.A.S. COLBOLETOS** respetuosamente manifiesto al despacho que REASUMO el poder inicialmente conferido por esta última y acto seguido, procedo a descorrer el traslado de las excepciones previas propuestas por los llamados en garantía señores Oreste Sangiovanni Panebianco, José Gabriel Sangiovanni Panebianco, Osberth Orozco Pérez, Julio César Díaz, Luis Hernán Valero Jiménez y Alejandro Valero Jiménez, con base en las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

• **OPORTUNIDAD PARA DESCORRER EL TRASLADO**

El día 09 de noviembre de 2020 mi representada recibió a través de correo electrónico, copia del escrito de las excepciones previas propuestas por los nombrados anteriormente, en calidad de llamados en garantía, tal como se evidencia enseguida:

De: **ELSA EUGENIA ESCOBAR CASTAÑO** <elsaescobar81@hotmail.com>

Date: lun., 9 nov. 2020 a las 15:09

Subject: Excepción previa. Rad: 2018 - 120

To: j15cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co <j15cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>, notificaciones@gha.com.co <notificaciones@gha.com.co>, info@colboletos.com <info@colboletos.com>, Osberth Orozco <osberth@gmail.com>, JOGASA SAS <JOGASASAS@hotmail.com>, julio.diaz@bdssa.net <julio.diaz@bdssa.net>, alevajim@yahoo.com <alevajim@yahoo.com>, osangiovanni14@hotmail.com <osangiovanni14@hotmail.com>, luishvaleroabogado@yahoo.com <luishvaleroabogado@yahoo.com>, gerencia@rkapital.com <gerencia@rkapital.com>

Buenas tardes,

Señores:

Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali

E. S. D.

Referencia: Proceso Verbal

Demandante: Colboletos

Demandado: América de Cali

Radicado: 2018 - 120

Asunto: Presentar excepción previaluis

Sobre el cómputo del término de traslado, el artículo 9 del Decreto 806 de 2020 establece:

Artículo 9. Notificación por estado y traslados. Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva.

No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las providencias que decretan medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal.

De la misma forma podrán surtirse los traslados que deban hacerse por fuera de la audiencia.

Los ejemplares de ellos estados y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta permanente por cualquier interesado.

Parágrafo. Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.
(El resaltado es propio).

Así las cosas, teniendo en cuenta que mi representada recibió copia del escrito el día 09 de noviembre de 2020, el traslado comienza a surtirse una vez finalizado el día 11 de noviembre de 2020 (dos días hábiles siguientes al envío del mensaje), y en consecuencia, tal como indica la norma, el término empezará a correr a partir del día siguiente, día 12 de los corrientes, durante los días 12, 13 y 17 de noviembre de 2020. Consecuentemente, el presente escrito se radica dentro del término legal oportuno.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS EXCEPCIONES PREVIAS

Las excepciones previas ante las que me pronuncio son las que se refieren seguidamente:

- **FRENTE A LA CAUSAL DE EXCEPCIÓN PREVIA DE QUE TRATA EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – POR LA SUPUESTA “INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES”**

Sostienen los excepcionantes citados, que en su criterio, siendo extracontractual la responsabilidad que se predicaría de ellos, y contractual la que compromete a la sociedad América de Cali S.A., supuestamente no podrían acumularse pretensiones sobre tales responsabilidades en un mismo proceso, porque en su concepto serían excluyentes entre sí. No obstante, es evidente que esa concepción de los llamados en garantía sobre el tema es errada, por cuanto implicaría el desconocimiento de los preceptos legales que al respecto se encuentran en el Estatuto Procesal vigente, así como la línea jurisprudencial pertinente, que constituye precedente obligatorio.

En efecto, deben negarse las peticiones de la excepción en cuestión, por cuanto siendo el llamamiento en garantía un acto en virtud del cual el convocante pretende que los

convocados respondan en el eventual y contingente caso de que prosperen una o algunas de las pretensiones de la demanda en reconvención, pues jurídicamente estos tendrían que responder ante el demandante en reconvención, se concluye que el llamamiento en garantía es la herramienta procesal adecuada para este propósito y por ende, lo que importa es la relación jurídica en virtud de la cual se puede pedir a los llamados que respondan o mantengan indemnes al demandado en reconvención.

El llamamiento en garantía, entonces instrumenta la posibilidad de que en un mismo proceso los convocados igualmente sean declarados civilmente responsables en el hipotético caso de que prosperaran las pretensiones de la demanda en reconvención, y lo esencial para ello es que la relación jurídica que los vincula, ya sea de estirpe legal o contractual, efectivamente conforme la causa petendi en virtud de la cual ellos sí son sujetos pasivos de la acción que en su contra está revestida a través del llamamiento en garantía.

De suerte que, esa causa petendi que habilita y legitima la procedencia del llamarlos en garantía puede ser de naturaleza contractual o extracontractual, pues su relación con la litis original o primigenia de este proceso no está fundada en el incumplimiento del contrato en el que concertaron Espectáculos y Eventos de Colombia S.A.S. Colboletos y América de Cali S.A., pues no es menester que los llamados en garantía sean parte de tal convención, sino que lo que resulta esencial es cómo sus actos, como directores y administradores, por los cuales deben responder civilmente en forma directa por los perjuicios ocasionados a terceros, entre ellos mi representada, pues fue por la decisión de esos convocados, adoptada como gestores de la administración de la demandante en reconvención, que esta última persona jurídica terminó unilateral, prematura e ilegalmente el Contrato de Mandato Comercial con Representación para Venta y Comercialización de Boletería, Recaudo y Servicios Adicionales No. 13-001.

La excepción propuesta parte de un yerro en su fundamento, cuál es que, supuestamente por no ser ellos parte de un contrato con la llamante, no sería viable su vinculación al proceso, pues estiman, también equivocadamente, que como la controversia entre la demandante inicial y la demandada es de carácter contractual, según los mismos llamados no sería procedente que en el mismo proceso se resuelva lo concerniente a la relación sustancial o jurídica que se generó entre ellos y que es la que se predica en el llamamiento en garantía, de naturaleza extracontractual, pues lo que importa es que en el derecho material está consagrado, tanto el en artículo 23 y siguientes de la Ley 222 de 1995, como en los artículos 2341 y siguientes del C.C., que quien produce un daño a otro está civilmente obligado a repararlo.

Aquí nos encontramos en un asunto en el que los llamados en garantía tienen una relación jurídica, que se origina en sus actos y omisiones como administradores de la demandante en reconvención, los cuales comprometen a cada uno de ellos individualmente y les impone el deber jurídico de resarcir el perjuicio ocasionado o derivado de tales actuaciones suyas, que son las que se esgrimen en los hechos del llamamiento en garantía que se les formuló,

que incluso permiten, si a su arbitrio lo quisiera hacer mi representada, fundar pretensiones como demandados directos, acumulando pretensiones en su contra, no por ser partes de un contrato en el que no lo son, sino porque como directores y administradores de aquella otra sociedad obraron aprobando y ejecutando decisiones, contrarias a la ley e incluso a los estatutos, y de ello se genera la presunción de su culpa, que consagra la citada Ley 222.

Además, sobre este particular, la evolución en el derecho nacional proscribió aquella pretérita regla, según la cual no podrían acumularse pretensiones de responsabilidades de estirpe contractual, con otras de estirpe extracontractual, tal como comenzó a reconocerlo la jurisprudencia en materia de la responsabilidad civil por productos, en la que el demandante puede accionar no solo contra el distribuidor que le vendió un determinado bien, sino también contra el productor o fabricante, con el que en principio no existe contrato. Igual sucede en el caso de la responsabilidad civil en materia del contrato de transporte, en el que se pueden acumular pretensiones de responsabilidad civil contractual, con las de responsabilidad civil extracontractual, por el daño al pasajero, en razón de la convención que obliga al transportista a llevarlo a determinado lugar en perfecto estado, o por el daño directo a los deudos del pasajero, que extracontractualmente reclaman la indemnización por la afectación directa que el hecho del transportista les genera, independientemente del contrato de transporte.

Ya la Ley 1395 de 2010 marcó un hito importante para superar la arcaica regla que proscribía la posibilidad de acumular pretensiones de responsabilidad contractual con otras de responsabilidad extracontractual, y ahora, entre otras, sobresale lo que al respecto estatuye el artículo 88 del Código General del Proceso, en virtud del cual se pueden acumular pretensiones de naturaleza contractual, con otras que sean extracontractuales.

No obstante, no podemos llamarnos a engaños o equívocos, y es que aquí no solo es procedente llamar en garantía a los excepcionantes citados, respecto de la demanda de reconvención que fue admitida, para que respondan en el improbable caso de que esta resultara favorable parcial o totalmente a la actora en reconvención, sino que además sería procedente incluso demandarlos también o llamarlos en garantía frente a la demanda de mi representada que sirvió de génesis al proceso, precisamente por lo normado en el citado artículo 88, que permite la acumulación de pretensiones y textualmente reza:

“Artículo 88. Acumulación de pretensiones. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurren los siguientes requisitos:

- 1. Que el juez sea competente para conocer de todas, sin tener en cuenta la cuantía.*
- 2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.*

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

En la demanda sobre prestaciones periódicas podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquella y el cumplimiento de la sentencia definitiva.

También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios demandantes o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando provengan de la misma causa.

b) Cuando versen sobre el mismo objeto.

c) Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia.

d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas.

En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, los mismos bienes del demandado”. (Énfasis propio).

Como se observa, el precepto legal invocado permite la formulación de diversas pretensiones contra uno o varios demandados, **pese a que entre uno y otro el interés sea distinto**, cuando se configure al menos uno de los presupuestos arriba enunciados. Así, nada impide que en la demanda de llamamiento en garantía se formulen pretensiones extracontractuales, cuando las mismas provienen de la misma causa, versan sobre el mismo objeto y se sirven de las mismas pruebas, en relación con las pretensiones contractuales.

Vale la pena indicar que recientemente la Corte Suprema de Justicia¹, en uno de sus varios pronunciamientos sobre el particular, ciertamente reiteró que son acumulables pretensiones de distinta naturaleza, contractual o extracontractual, y contra diversos sujetos pasivos, ya que la *causa petendi* puede fundarse en relaciones jurídicas diversas, que en virtud de la ley o de una convención, se pueden oponer o esgrimir frente a los distintos litisconsortes de la contraparte, sin que tenga que haber identidad material en la génesis del derecho del que sea titular el actor, como por ejemplo en la providencia que se transcribe parcialmente a continuación:

“La formulación de las pretensiones, de las excepciones y de los hechos en que unas y otras se sustentan es una manifestación del principio dispositivo, en virtud

¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad.: 18001-31-03-001-2010-00053-01. Sentencia SC780-2020, de 10 de marzo de 2020.

del cual el ejercicio de la acción procesal está encomendado en sus dos formas, activa y pasiva, a las partes y no al juez.

Una de las circunstancias que surgen de esa potestad es la acumulación de pretensiones, que está justificada por el principio de economía procesal y por el propósito de evitar que sobre causas idénticas o conexas se pronuncien sentencias contrarias o contradictorias.

En tal virtud, nada obsta para que un demandante acumule en una demanda varias pretensiones contra uno o varios demandados, o que varios demandantes acumulen pretensiones contra uno o varios demandados; siempre que se cumplan los requisitos que exige el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil (artículo 88 del Código General del Proceso).

Desde un punto de vista procesal, es posible que las pretensiones de un demandante se decidan conforme al régimen de la responsabilidad contractual y las de otro demandante se ventilen bajo la extracontractual, pues nada impide que ambas pretensiones se acumulen en el mismo proceso.

(...) De hecho, la acumulación de pretensiones presupone la distinción de acciones sustanciales e impide su confusión o mezcla. (...)”

Con todo, es evidente que las normas procesales vigentes permiten -en aras de la economía procesal- acumular pretensiones contractuales y extracontractuales, contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros.

Retomando el caso en estudio, es pertinente precisar al Despacho, que si bien es claro que la responsabilidad civil contractual atribuible a América de Cali S.A. se deriva del incumplimiento, entre otros por la terminación unilateral e ilegal del Contrato de Mandato Comercial con Representación para Venta y Comercialización de Boletería, Recaudo y Servicios Adicionales No. 13-001, celebrado entre la nombrada sociedad y mi representada, lo cierto es que concomitantemente los actos de los miembros de la Junta Directiva de esa sociedad, quienes tienen la calidad de administradores, tomaron y ejecutaron decisiones relativas, en un principio, no solo para la inicial concertación de dicho negocio jurídico, sino que ya encontrándose en ejecución, a sabiendas que ese contrato tiene la jerarquía de ley entre las partes, aprobaron y llevaron a cabo la decisión de que la demandante en reconvención efectivamente rompiera arbitraria e injustificadamente el contrato, pese a que no podía obrar como juez y declarar autónomamente la resolución o terminación del contrato, ya que es improcedente que se abroge esa facultad, que solo tiene un juez de la república.

Además, tampoco existía causal alguna que configurara una condición resolutoria y por ende la actuación de los administradores, que como miembros de la Junta Directiva responden individualmente por sus actos, que produzcan perjuicios a terceros, en forma

solidaria e ilimitada, es la que conforme a los preceptos de los artículos 21 y siguientes de la Ley 222 de 1995, sirve de base o génesis a la responsabilidad aquiliana, que como directores y administradores, recae sobre los llamados en garantía y por eso es posible, además de que hay una unidad de prueba, no solo ventilar las pretensiones incorporadas en la convocatoria que se hizo para vincularlos, sino que adicionalmente serviría incluso para demandarlos directamente, acumulando pretensiones con las de carácter contractual que se están incoando contra el América de Cali S.A., toda vez que los actos u omisiones de los administradores llamados en garantía, en cuanto configuran la violación del contrato y en consecuencia de la ley que este reviste, según el artículo 1602 del C.C., configura una transgresión de la ley y de los estatutos sociales, ya que motivó la subsiguiente decisión de tal empresa de terminar arbitrariamente el contrato. En ese sentido, los perjuicios que tal decisión provocó a mi representada abren paso a la responsabilidad civil extracontractual de los llamados en garantía, frente a la sociedad que represento, lo cual los legitima por pasiva.

El sustento legal de dicha responsabilidad se consagra el artículo 200 del Estatuto Mercantil, modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995:

*“Responsabilidad de los administradores. Los administradores **responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a (...) a terceros**.*

No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento (sic) de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten.

En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador.

De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar.

Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal.

Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades ante dichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos”. (Negritas y subrayas ajenas al texto original).

Resulta oportuno señalar que la Junta Directiva, de manera especial, tiene previstas las siguientes atribuciones legales, previstas en el Código de Comercio así:

*“Artículo 438. Atribuciones de la Junta Directiva. Salvo disposición estatutaria en contrario, **se presumirá que la junta directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines.**” (Énfasis propio).*

En el presente caso y como a continuación se evidencia, tal como fue comunicado por la sociedad demandada a mi representada, a través de comunicación de fecha 14 de abril de 2015, suscrita por el señor Oreste Sangiovanni Panebianco, fue la Junta Directiva, es decir las personas integrantes de la misma, pues sus actos en ese órgano son individuales y sus responsabilidades tienen ese mismo carácter, por cuanto los llamados fueron los que participaron y tomaron la decisión, para que esa sociedad terminara unilateral e injustificadamente el contrato concertado entre aquellas:



América
de Cali

038

Cali, Abril 14 de 2015

Señor
Carlos Arturo Fernandez Castillo
Representante Legal
Espectáculos y Eventos de Colombia S.A.S.
“Colboletos”
Ciudad

Doctor Fernandez;

Como se lo informamos a Usted en nuestra comunicación de Marzo 30 de 2015, y ante el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo de Espectáculos y Eventos de Colombia S.A.S. “Colboletos” la entidad que represento les informo la decisión tomada por la Junta Directiva y la Asamblea de accionistas celebrada el 28 de marzo de 2015, de dar por terminado con justa causa el denominado “Contrato de Mandato Comercial con Representación para Venta y Comercialización de Boletería, Recaudo y Servicios Adicionales”, suscrito entre las partes el 20 de noviembre de 2012 y que tiene como objeto principal la emisión, distribución, venta de boletería, recaudo de dinero, convenio de tesorería y manejo de la caja, garantía de taquilla, **fondeo de caja**, comercializadora de la publicidad, entre otros tal como veníamos registrando el incumplimiento a las obligaciones contractuales por parte de Espectáculos y Eventos de Colombia S.A.S. “Colboletos” y que manifestamos de forma expresa en las comunicaciones radicadas en su oficina y que relacionamos a continuación:

En igual sentido, podrá corroborarse la efectiva participación e incidencia del nombrado órgano de administración, a través del extracto del acta No. 068 de la Junta Directiva, aportado por la sociedad demandante en reconvención, en la que se consignó literalmente:

6. Otras deliberaciones y decisiones de la Junta Directiva.

Tema Colboletos:

El doctor Oreste Sangiovanni P., solicita autorización a la Junta Directiva para dar por terminado el contrato de Colboletos, quien definitivamente sigue incumpliendo lo pactado en el contrato y está obligando a los socios a poner dinero en préstamo en la caja de América para poder operar y cubrir sus gastos de administración.

Autorización que es otorgada de manera unánime y además se autoriza al Representante Legal, para contratar la mejor opción para la venta de boletería y con garantía de fondeo de caja. Además a celebrar los contratos necesarios para encontrar recursos adicionales, como contratos de patrocinio, publicidad, prestamos de socios con garantía y/u otros, etc.

Conviene tener presente lo enunciado por la Superintendencia de Sociedades respecto a la responsabilidad de los administradores, así²:

... No puede existir, por tanto, duda alguna respecto del alcance de la responsabilidad que asumen, en lo sucesivo, los administradores de las sociedades. Bastará, por tanto, que se compruebe que hubo culpabilidad, daño y relación de causalidad para que se imponga responsabilidad solidaria a todos los administradores que participaron en la toma de la decisión respectiva o que la ejecutaron. Por lo demás es suficientemente claro que la responsabilidad que puede imputarse a los administradores, puede ser de naturaleza contractual o extracontractual. (Subrayas y negritas ajenas al texto original).

Con todo, es evidente (i) que procesalmente es permitida la acumulación de pretensiones de índole contractual y extracontractual atribuibles a uno o varios demandados, y (ii) que la Junta Directiva de América de Cali S.A. En Reorganización tomó unánimemente la decisión unilateral de dar por terminado el Contrato de Mandato Comercial con Representación para Venta y Comercialización de Boletería, Recaudo y Servicios Adicionales No. 13-001, suscrito entre aquella y mi procurada.

- **FRENTE A LA SEGUNDA EXCEPCIÓN PREVIA, QUE ES LA QUE TRATA EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, SUPUESTAMENTE POR “NO HABERSE PRESENTADO PRUEBA DE LA CALIDAD EN QUE ACTÚAN LOS LLAMADOS EN GARANTÍA”**

Esta excepción de los llamados en garantía, parte del supuesto errado de que la convocatoria que hizo mi mandante, supuestamente correspondería a la acción social de responsabilidad, lo cual no es cierto, ya que lo que está invocando como *causa petendi* es la reunión de los elementos normativos que generan una responsabilidad civil

² Superintendencia de Sociedades, oficio número 220-020887 de 25 de febrero de 2013.

extracontractual de los excepcionantes, derivada de sus hechos o actos como administradores de la sociedad; de manera que ante la demanda de reconvención mi procurada no solo se opuso a esta última y, sin que ello constituya reconocimiento de compromiso o responsabilidad alguna, llamó a los directores que por sus actos en esa calidad fueron los que provocaron la ruptura arbitraria e ilegal del contrato que mi representada había celebrado con aquella otra empresa.

Efectivamente, la convocatoria a los llamados no se hace en virtud de los perjuicios que ellos eventualmente le hubieran ocasionado a la sociedad ni por la responsabilidad civil que los comprometa a resarcirlos. Se efectúa su citación es por la responsabilidad civil ante terceros, en este caso Colboletos y consecuentemente, por el deber jurídico de indemnizar que tendrían en el remoto caso en que las pretensiones de la demanda en reconvención prosperaran, pues fueron ellos los que, según la carta de terminación del contrato que emitió dicha compañía, la decisión de terminar el contrato en la forma en que se hizo, fue de la Junta Directiva, es decir, de sus miembros individualmente considerados, que habrían aprobado obrar en ese sentido.

Entonces, en esta excepción amañadamente se confunden las acciones de responsabilidad civil extracontractual, que los terceros, como Colboletos, pueden ejercer contra los convocados (ya sea mediante demanda o en este caso, con el llamamiento en garantía, que se les formuló ante la demanda de reconvención), con la acción social de responsabilidad, que no es la que se está ejercitando. Mi representada no está legitimada para ejercer la acción social de responsabilidad y no lo está haciendo.

En efecto, para esta defensa es claro que el fundamento jurídico de la acción social de responsabilidad contra los directores y administradores citados no se está fundando en el artículo 25 de la Ley 222 de 1995, sino que corresponde a la acción contemplada en el siguiente precepto, contenido en el artículo 24 de la citada ley:

“Responsabilidad de los administradores. Los administradores **responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a (...) a terceros.**

No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento (sic) de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten.

En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. (...)

Lo anterior, además, en concordancia con lo previsto en el artículo 438 del Estatuto Mercantil y los preceptos ya invocados de la responsabilidad civil extracontractual, del Código Civil.

Así las cosas, mi procurada entiende cabalmente que no es el sujeto activo de la acción social de responsabilidad (que no ha promovido) y por lo mismo, no ha enderezado ni ejecutado ninguna actuación procesal encaminada a acreditar los presupuestos necesarios para que se estructure la misma. Recuérdese, en todo caso, que el citado artículo reza de manera literal:

*Artículo 25. Acción social de responsabilidad. La acción social de responsabilidad contra los administradores **corresponde a la compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios**, que podrá ser adoptada aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que represente por lo menos el veinte por ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en que se halle dividido el capital social.*

La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión e implicará la remoción del administrador.

Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la asamblea o junta de socios, no se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los tres meses siguientes, ésta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad. En este caso los acreedores que representen por lo menos el cincuenta por ciento del pasivo externo de la sociedad, podrán ejercer la acción social siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que correspondan a los socios y a terceros. (Resaltado propio).

Con fundamento en lo anterior, resulta evidente para este extremo del litigio que mi representada no está legitimada para adelantar la acción social de responsabilidad civil, comoquiera que ella corresponde expresamente a la sociedad, y por lo tanto, es claro que:

1. NO es cierto que mi representada debió demostrar la calidad de accionista dentro de la sociedad demandada ni la celebración de la asamblea y la correspondiente acta donde América de Cali S.A. haya decidido promover la acción social de responsabilidad en contra de los llamados en garantía, toda vez que -se insiste- mi procurada no ha instaurado tal acción.

2. En igual sentido y por la misma causa, no es exigible que mi representada acredite si la acción fue promovida o no dentro de los tres meses siguientes, comoquiera que tal asunto es ajeno a Espectáculos y Eventos de Colombia S.A.S. Colboletos, quien conoce plenamente que no es el sujeto activo de la aludida acción de responsabilidad social.

3. En orden de lo comentado (y sorprende a esta defensa la manifestación de la apoderada judicial de los llamados en garantía) mi representada no está jurídicamente obligada a demostrar ninguna acreencia de la sociedad demandada que represente por lo menos el cincuenta por ciento del pasivo externo de la sociedad. Todas las apreciaciones anteriores son indudablemente fuera del contexto legal y jurídico que se discute en el presente asunto y en todo caso, se resalta, **ESPECTÁCULOS Y EVENTOS DE COLOMBIA S.A.S. COLBOLETOS NO HA PRETENDIDO IMPULSAR LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD.**

A pesar de lo anterior y a efectos de brindar claridad al despacho y a los demás intervinientes sobre la calidad en que actúan los llamados en garantía, procedo a realizar las siguientes consideraciones:

1. Mi representada, como demandada en reconvención dentro del presente trámite, llamó en garantía a los señores Luis Valero J., Osberth Orozco P., José Gabriel Sangiovanni P., Fernando Guzmán G., Julio César Díaz, Germán Alberto Ochoa, Alejandro Valero J. y Oreste Sangiovanni P., en su calidad de administradores de América de Cali S.A. En Reorganización, habida cuenta de su decisión injustificada y unilateral de dar por terminado el contrato suscrito entre esa sociedad y mi procurada, tal como se acreditó en líneas anteriores.

En ese entendido, y siendo claro que en virtud de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995 “***los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros***”, es manifiesto que los nombrados deben responder por los perjuicios causados por su arbitraria decisión, respecto a la terminación del citado contrato.

A efectos de ilustrar a profundidad sobre este asunto, es oportuno recordar lo dicho por la Corte Suprema de Justicia³, quien explica inequívocamente la responsabilidad de los administradores frente a terceros, en los siguientes términos:

*... es dable visualizar que el legislador, además de la responsabilidad contractual fincada en el negocio jurídico que da origen a las sociedades comerciales y que vincula por igual a quienes lo celebran, **estableció un régimen particular de responsabilidad en relación con sus administradores, que opera sólo respecto de ellos, nada más que en su condición de tales, y como consecuencia de las acciones u omisiones en que, mediando dolo o culpa, incurran al desempeñar dicha función**, en razón del cual aquéllos **deben responder por los perjuicios que ocasionen a la sociedad, sus socios o terceros**, régimen que, cuando el administrador es una persona jurídica, se extiende solidariamente a su representante legal.*

³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Ref.: 05001-3103-016-2002-00007-01, sentencia del 26 de agosto de 2011.

(...) Con otras palabras, “al margen de la responsabilidad que a la persona jurídica podía corresponderle por los actos ejecutados por sus administradores, en el marco de sus atribuciones legales o estatutarias, **también éstos podían ver comprometida su responsabilidad personal frente a la misma sociedad, los socios o terceros, tal y como ocurre bajo el régimen actual, cuando su obrar culpable, intencionado o no, se constituía en fuente de lesión de un derecho del cual fueren titulares aquellos** (...). De acuerdo con los principios generales que gobiernan el régimen de la responsabilidad civil, el surgimiento de la obligación indemnizatoria a cargo de los administradores del ente social, es decir, de quienes tuvieran a su cargo la representación y el manejo de sus bienes y negocios, sea que desarrollaran funciones de representación de la sociedad o solamente de gestión, estaba supeditado a que incurrieran en una acción u omisión dolosa o culposa, y que de ese comportamiento se derivara un daño para uno de los sujetos mencionados, es decir, **que entre su conducta y el perjuicio ocasionado existiese una relación de causalidad adecuada, responsabilidad que debía y debe deducirse dentro del marco de la responsabilidad civil extracontractual, cuando el sujeto damnificado con la actuación del administrador de la empresa social es un tercero**” (Cas. Civ., sentencia del 30 de marzo de 2005, expediente 9879; se subraya).

En suma, es entendido que los administradores son extracontractualmente responsables por los perjuicios que causen a terceros, en desarrollo de sus funciones, facultades o atribuciones.

2. En todo caso, y a fin de aclarar cualquier asunto en torno a la calidad de los llamados en garantía, debe tener presente el despacho que fue la misma sociedad demandada quien incorporó al plenario los extractos de las actas celebradas por la Junta Directiva de América de Cali S.A. En Reorganización, y que fueron allegados por mi procurada con el llamamiento en garantía, donde puede observarse que aquellos se desempeñaban para la época de los hechos como miembros de dicho órgano, tal como se ilustra a continuación:

En la ciudad de Cali, Capital del Departamento del Valle del Cauca, siendo las 5:00 p.m. del día 13 de octubre de 2014, previa convocatoria realizada por el Representante Legal el Dr. ORESTE SANGIOVANNI P., mediante comunicación escrita enviada a todos los miembros de Junta Directiva al correo electrónico que se tiene registrado de cada uno de ellos:

LUIS VALERO J.	luishvaleroabogado@yahoo.com,
OSBERTH OROZCO P.	osberth@gmail.com
JOSÉ GABRIEL SANGIOVANNI P.	jogasa06@hotmail.com
FERNANDO JOSÉ CABAL S.	fjc@uniweb.net.co
FERNANDO GUZMÁN G.	ferguzga@hotmail.com
JULIO CESAR DIAZ	julio.diaz@bdssa.net
OSCAR H. GUZMAN M.	oguzman@ccc.org.co
GERMAN ALBERTO OCHOA	german_alberto_ochoa@hotmail.com
ALEJANDRO VALERO J.	alevaljim@yahoo.es

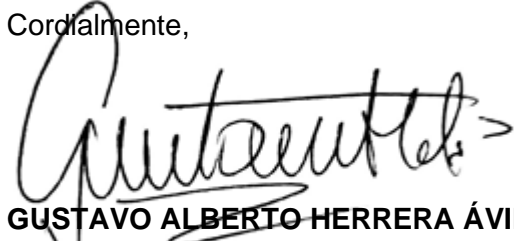
PETICIÓN

Con fundamento en todo lo expuesto, respetuosamente solicito al despacho declarar infundadas y consecuentemente, NO PROBADAS las excepciones previas propuestas por los llamados en garantía.

MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTALES

1. Copia de la comunicación dirigida a Espectáculos y Eventos de Colombia S.A.S. Colboletos, por parte de América de Cali S.A. En Reorganización, de fecha 14 de abril de 2015.
2. Copia del extracto del Acta No. 068 de la Junta Directiva de América de Cali S.A. En Reorganización, de fecha 24 de marzo de 2015.
3. Copia del derecho de petición formulado por Espectáculos y Eventos de Colombia S.A.S. Colboletos a la sociedad América de Cali S.A. En Reorganización, a fin de obtener información sobre la designación y elección de los miembros de la Junta Directiva y representantes legales de esa sociedad, para la fecha de los hechos que atañen al presente asunto, radicado el 17 de noviembre de 2020.

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.